

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
TRIBUNAL DE APELACIONES  
PANEL V

LIZABELLE DE JESÚS  
DELGADO

Apelante

Vs.

MAPFRE-PRAICO  
INSURANCE COMPANY  
Y OTROS

Apelada

KLAN202200468

APELACIÓN  
procedente del  
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala  
Superior de  
Caguas

Civil. Núm.  
CG2021CV00594

Sobre: DAÑOS Y  
PERJUICIOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Hernández Sánchez, Juez ponente

**SENTENCIA**

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2022.

El 16 de junio de 2022, la señora Lizabelle De Jesús Delgado (señora De Jesús o apelante) compareció ante nos mediante recurso de apelación. Nos solicita la revocación de la *Sentencia* emitida el 8 de junio de 2022 y notificada el 11 siguiente. Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) –al amparo del *Order and Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority (Confirmation Order)*– paralizó la reclamación de la apelante por falta de jurisdicción.

Por los fundamentos expuestos, **CONFIRMAMOS** la *Sentencia* apelada.

**I.**

El 10 de marzo de 2021, la señora De Jesús presentó *Demanda* sobre daños y perjuicios en contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico (ELA), del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de Mapfre-Praico Insurance Company y otros (apelados).<sup>1</sup> En síntesis, adujo que el 30 de junio de 2020, mientras conducía su vehículo, este cayó en un “manhole” lleno de agua, el cual no estaba debidamente tapado.<sup>2</sup> Sostuvo que dicha caída le causó lesiones corporales.<sup>3</sup> Además, arguyó que el accidente se debió a la negligencia de la AAA, del DTOP y del ELA, ello al no mantener las carreteras bajo su control en condiciones seguras.<sup>4</sup> Como parte de los remedios, solicitó una indemnización de \$50,000.00 en concepto de daños físicos, \$15,000.00 en concepto de daños y angustias mentales y \$8,000.00 por los daños que sufrió su vehículo.<sup>5</sup>

Luego de varios incidentes procesales que no son necesarios detallar, el 11 de abril de 2022, el Departamento de Justicia, en representación del ELA, presentó *Aviso de injunction paralizando la litigación del presente caso y sobre el requisito de presentar una solicitud de gastos administrativos ante el Tribunal de Título III*.<sup>6</sup> Mediante esta, alegó que, en virtud del *injunction* permanente contemplado en el *Confirmation Order* emitido por el Tribunal de Distrito Federal, procedía la paralización del caso.<sup>7</sup> Específicamente, sostuvo que la paralización automática contemplada en el Título III de la *Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act* (PROMESA), 48 USC sec. 2101 *et. seq.* continuaba, pero al amparo del párrafo 59 del *Confirmation Order*, mediante el cual el Tribunal del Distrito Federal confirmó el Plan de Ajuste de la Deuda.<sup>8</sup> Así, respecto al *injunction*, detalló lo siguiente:

---

<sup>1</sup> *Demanda*, págs. 5-10 del apéndice del recurso.

<sup>2</sup> *Íd.*, pág. 7.

<sup>3</sup> *Íd.*

<sup>4</sup> *Íd.*, págs. 7-8.

<sup>5</sup> *Íd.*, pág. 9.

<sup>6</sup> *Aviso de injunction paralizando la litigación del presente caso y sobre el requisito de presentar una solicitud de gastos administrativos ante el Tribunal de Título III*, págs. 11-18 del apéndice del recurso.

<sup>7</sup> *Íd.*, pág. 13.

<sup>8</sup> *Íd.*

[s]obre las reclamaciones descargadas o liberadas, el *Confirmation Order* decreta un *injunction* permanente (“*Injunction on Claims*”), en cuanto a las reclamaciones de todas las entidades (“*All Entities*”) o cualquier otra deuda o responsabilidad que se tenga, se haya tenido o se pueda tener en el futuro que sea descargada o liberada de conformidad con la sección 92.2 del Plan de Ajuste, indicando expresamente que están permanentemente prohibidas, desde y después de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste.<sup>9</sup>

Por otro lado, alegó que, según el *Confirmation Order* y el *Notice of (A) Entry of Order Confirming Modified Eighth Amended Title III Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, et al. Pursuant to Title III Of PROMESA and (B) Occurrence of the Effective Date (Notice)* – emitido por la Junta de Control Fiscal el 15 de marzo de 2022– procedía que la reclamación se atendiera en el Tribunal de Distrito Federal a cargo del caso bajo el Título III de PROMESA, a través del proceso de solicitud de gastos administrativos (*administrative expense claims*).<sup>10</sup> Sobre el particular, detalló que, según el *Notice*, dicho procedimiento debía presentarse en o antes del 13 de junio de 2022.<sup>11</sup> Además, alegó que, de no presentar dicha solicitud en el término concedido, la parte estaba vedada permanentemente de hacer la reclamación de pago en contra del deudor.<sup>12</sup> Finalmente, alegó que las aludidas disposiciones aplicaban a la reclamación de epígrafe, la cual fue presentada *post-petition* y previo a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda.<sup>13</sup>

En respuesta, el 19 de abril de 2022, la apelante presentó *Moción en oposición a “Aviso de injunction paralizando la litigación del presente caso y sobre el requisito de presentar una solicitud de gastos administrativos ante el Tribunal de Título III”*.<sup>14</sup> Argumentó que el *injunction* contenido en el *Confirmation order* no se extendía

---

<sup>9</sup> Íd., págs. 13-14.

<sup>10</sup> Íd., pág. 13.

<sup>11</sup> Íd., pág. 15.

<sup>12</sup> Íd., pág. 16.

<sup>13</sup> Íd., pág. 17.

<sup>14</sup> *Moción en oposición a “Aviso de injunction paralizando la litigación del presente caso y sobre el requisito de presentar una solicitud de gastos administrativos ante el Tribunal de Título III*, págs. 19-25 del apéndice del recurso.

al presente caso.<sup>15</sup> Sobre el particular, adujo que la quiebra paralizó todo procedimiento o acción judicial basada en un derecho surgido previo a la radicación de la petición de quiebra.<sup>16</sup> En ese sentido, afirmó que la jurisdicción del Tribunal Federal se extendía a aquellas reclamaciones que fueron notificadas por el quebrado, y cuyos acreedores fueron notificados en el proceso de quiebra.<sup>17</sup> Por lo tanto, aseguró que el Tribunal Federal no tenía autoridad sobre la reclamación de epígrafe, pues esta no formaba parte del marco de aplicación de la quiebra.<sup>18</sup> En consecuencia, solicitó que se declarara no ha lugar la solicitud de *injunction* permanente presentada por el ELA.<sup>19</sup>

El 6 de mayo de 2022, el ELA, representado por el Departamento de Justicia, presentó *Réplica a moción en oposición al aviso de injunction paralizando la litigación del presente caso y sobre el requisito de presentar una solicitud de gastos administrativos ante el Tribunal de Título III*.<sup>20</sup> Mediante esta, entre otras cosas, reiteró que el *injunction* permanente establecido en el *Confirmation Order* aplicaba en casos presentados en o antes de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste de la Deuda, es decir, en o antes del 15 de marzo de 2022.<sup>21</sup> Por otro lado, explicó que no estaba presentando un aviso de paralización automática bajo el Código de Quiebras, aplicado a los casos *pre-petition*, sino que se trataba de un *injunction* al amparo del párrafo 59 del *Confirmation Order* y el *Notice*, aplicable a reclamaciones *post-petition*.<sup>22</sup> En ese sentido, argumentó que el *injunction* tuvo el efecto de paralizar el caso permanentemente y de

---

<sup>15</sup> Íd., pág. 20.

<sup>16</sup> Íd., pág. 21.

<sup>17</sup> Íd.

<sup>18</sup> Íd.

<sup>19</sup> Íd., pág. 25.

<sup>20</sup> *Réplica a moción en oposición al aviso de injunction paralizando la litigación del presente caso y sobre el requisito de presentar una solicitud de gastos administrativos ante el Tribunal de Título III*, págs. 26-36 del apéndice del recurso.

<sup>21</sup> Íd., pág. 28.

<sup>22</sup> Íd., pág. 35.

conceder el remedio del *Administrative Expense Claim* dentro del caso federal.<sup>23</sup>

Atendida la solicitud de aviso de *injunction* presentada por el ELA, el 8 de junio de 2022 el TPI emitió *Sentencia*.<sup>24</sup> Mediante su dictamen, el foro primario tomó conocimiento judicial del *Confirmation Order* y del *Notice* y determinó que carecía de jurisdicción para atender el asunto.<sup>25</sup> Específicamente, resolvió que el *Confirmation Order* tuvo el efecto de paralizar los procedimientos de los casos y reclamaciones en contra del deudor presentados después de la petición de reestructuración bajo el Título III de PROMESA (3 de mayo de 2017) y antes de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste de la Deuda (15 de marzo de 2022).<sup>26</sup> Además, resolvió que dichas reclamaciones debían presentarse mediante el procedimiento de *Administrative Expense Claim* establecido en el *Notice*.<sup>27</sup> En consecuencia, archivó el caso para fines administrativos.<sup>28</sup>

En desacuerdo, la apelante presentó el recurso de título y le imputó al foro primario la comisión del siguiente error:

**ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR HA LUGAR LA SOLICITUD DE AVISO DE INJUNCTION PARALIZANDO LA LITIGACIÓN DEL PRESENTE CASO Y SOBRE EL REQUISITO DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTE EL TÍTULO III.**

Luego de concederle término para ello, el 13 de julio de 2022, el ELA, representado por el Procurador General, presentó su alegato en oposición.

## II.

El Congreso de Estados Unidos, conforme a la facultad que le otorga la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos,

---

<sup>23</sup> Íd.

<sup>24</sup> *Sentencia*, págs. 1-4 del apéndice del recurso.

<sup>25</sup> Íd.

<sup>26</sup> Íd.

<sup>27</sup> Íd.

<sup>28</sup> Íd., pág. 4.

Art. IV, Sec. 3 Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, aprobó la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 *et. seq.* El fin principal de esta legislación fue establecer el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. *Requena Mercado et als. v. Policía de PR*, 205 DPR 285, 290 (2020); *Vélez et al. v. DE et al.*, 199 DPR 426 (2017) (Resolución) Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor Martínez Torres, pág. 428. A tono con ello, el Título III de PROMESA autoriza y establece el procedimiento para que el gobierno de Puerto Rico pueda presentar una petición de quiebra. 48 USC sec. 2161.<sup>29</sup>

Luego de que el ELA realizara una petición de quiebra, al amparo del Título III de PROMESA, el 18 de enero de 2022, la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico – encargado de la reestructuración de la deuda del ELA– emitió, como parte del caso *In re Commonwealth of Puerto Rico*, Case. No. 17BK3283-LTS, el *Order and Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority (Confirmation Order)*.<sup>30</sup> En virtud de dicha orden, la cual entró en vigor el 15 de marzo de 2022 (*effective date*) la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó el Plan de Ajuste de la Deuda.<sup>31</sup>

En lo pertinente, el Párrafo 59 del *Confirmation Order*, dispone lo siguiente:

---

<sup>29</sup> En virtud del Título III de PROMESA, el 3 de mayo de 2017, el ELA presentó una petición de quiebra ante la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

<sup>30</sup> Tomamos conocimiento judicial de la emisión del *Order and Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority* emitido en el caso 17-03283-LTS.

<sup>31</sup> Tomamos conocimiento judicial del *Modified Eighth Amended Title Iii Joint Plan Of Adjustment Of The Commonwealth Of Puerto Rico, Et Al.* del caso 17-03283-LTS.

59. Injunction on Claims. Except as otherwise expressly provided in section 92.11 of the Plan, this Confirmation Order, or such other Final Order of the Title III Court that is applicable, all Entities who have held, hold, or in the future hold Claims or any other debt or liability that is discharged or released pursuant to section 92.2 of the Plan or who have held, hold, or in the future hold Claims or any other debt or liability discharged or released pursuant to section 92.2 of the Plan are permanently enjoined, from and after the Effective Date, from (a) commencing or continuing, directly or indirectly, in any manner, any action or other proceeding (including, without limitation, any judicial, arbitral, administrative, or other proceeding) of any kind on any such Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan against any of the Released Parties or any of their respective assets or property, (b) the enforcement, attachment, collection or recovery by any manner or means of any judgment, award, decree, or order against any of the Released Parties or any of their respective assets or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan, (c) creating, perfecting, or enforcing any encumbrance of any kind against any of the Released Parties or any of their respective assets or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan, and (d) except to the extent provided, permitted or preserved by sections 553, 555, 556, 559, or 560 of the Bankruptcy Code or pursuant to the common law right of recoupment, asserting any right of setoff, subrogation, or recoupment of any kind against any obligation due from any of the Released Parties or any of their respective assets or property, with respect to any such Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan. Such injunction shall extend to all successors and assigns of the Released Parties and their respective assets and property. Notwithstanding the foregoing, without prejudice to the exculpation rights set forth in section 92.7 of the Plan and decretal paragraph 61 hereof, nothing contained in the Plan or this Confirmation Order is intended, nor shall it be construed, to be a non-consensual third-party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related Persons by Creditors of the Debtors.

Por otro lado, la Sección 92.2 del Plan de Ajuste de la Deuda dispone en lo aquí pertinente, lo siguiente:

92.2 Discharge and Release of Claims and Causes of Action:

(a) Except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all distributions and rights afforded under the Plan shall be, and shall be deemed to be, in exchange for, and in complete satisfaction, settlement, discharge and release of, all Claims or Causes of Action against the Debtors and Reorganized Debtors that arose, in whole or in part, prior to the Effective Date, relating to the Title III Cases, the Debtors or Reorganized Debtors or any of their respective Assets, property, or interests of any nature whatsoever, including any interest accrued on such Claims from and after the Petition Date, and regardless of whether any property will have been distributed or retained pursuant

to the Plan on account of such Claims or Causes of Action; provided, however, that, without prejudice to the exculpation rights set forth in Section 92.7 hereof, nothing contained in the Plan or the Confirmation Order is intended, nor shall it be construed, to be a grant of a non-consensual third-party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related Persons by Creditors of the Debtors. Upon the Effective Date, the Debtors and Reorganized Debtors shall be deemed discharged and released from any and all Claims, Causes of Action and any other debts that arose, in whole or in part, prior to the Effective Date (including prior to the Petition Date), and Claims of the kind specified in sections 502(g), 502(h) or 502(i) of the Bankruptcy Code and PROMESA Section 407, whether or not (a) a proof of claim based upon such Claim is filed or deemed filed under section 501 of the Bankruptcy Code, (b) such Claim is allowed under section 502 of the Bankruptcy Code and PROMESA Section 407 (or is otherwise resolved), or (c) the holder of a Claim based upon such debt voted to accept the Plan. For the avoidance of doubt, nothing contained herein or in the Confirmation Order shall release, discharge or enjoin any claims or causes of action against PREPA arising from or related to PREPA-issued bonds, including, without limitation, Monoline-issued insurance pertaining thereto, and PREPA is not releasing any claims or causes of action against any non- Debtor Entity. Claims and causes of action against PREPA arising from or related to PREPA issued bonds, and releases against PREPA and its assets shall be addressed in PREPA's Title III case, including, without limitation, any plan of adjustment therein.

(b) Except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all Entities shall be precluded from asserting any and all Claims against the Debtors and Reorganized Debtors, and each of their respective Assets, property and rights, remedies, Claims or Causes of Action or liabilities of any nature whatsoever, relating to the Title III Cases, the Debtors or Reorganized Debtors or any of their respective Assets and property, including any interest accrued on such Claims from and after the Petition Date, and regardless of whether any property will have been distributed or retained pursuant to the Plan on account of such Claims or other obligations, suits, judgments, damages, debts, rights, remedies, causes of action or liabilities. In accordance with the foregoing, except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, the Confirmation Order shall constitute a judicial determination, as of the Effective Date, of the discharge and release of all such Claims, Causes of Action or debt of or against the Debtors and the Reorganized Debtors pursuant to sections 524 and 944 of the Bankruptcy Code, applicable to the Title III Case pursuant to Section 301 of PROMESA, and such discharge shall void and extinguish any judgment obtained against the Debtors or Reorganized Debtors and their respective Assets, and property at any time, to the extent such judgment is related to a discharged Claim, debt or liability. As of the Effective Date, and in consideration for the value provided under the Plan, each holder of a Claim in any Class under this Plan shall be and hereby is deemed to release and forever waive and discharge as against the Debtors and Reorganized Debtors, and their respective Assets and property and all such Claims.

[...]



Respecto a la definición de una causa de acción, la Sección

1.126 del Plan de Ajuste de la Deuda la define como:

1.126 Causes of Action:

All claims, actions, causes of action, rights to payment, choses in action, suits, debts, dues, sums of money, accounts, reckonings, bonds, bills, specialties, covenants, contracts, controversies, agreements, promises, variances, trespasses, damages, judgments, remedies, rights of setoff, third-party claims, subrogation claims, contribution claims, reimbursement claims, indemnity claims, counterclaims, and cross claims (including, but not limited to, all claims for breach of fiduciary duty, negligence, malpractice, breach of contract, aiding and abetting, fraud, inducement, avoidance, recovery, subordination, and all Avoidance Actions) that are pending or may be asserted against any Entity whether arising on or before the Effective Date, based in law or equity, including, but not limited to, under the Bankruptcy Code, whether known, unknown, reduced to judgment, not reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured or unsecured and whether asserted or assertable directly or derivatively, in law, equity or otherwise and whether asserted or unasserted as of the Effective Date.

Asimismo, la Sección 1.135 del Plan de Ajuste de la Deuda define “*claim*” como:

1.135 Claim:

Any right to payment or performance, whether or not such right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secured, or unsecured, known or unknown or asserted or unasserted; or any right to an equitable remedy for breach or enforcement of performance, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, or unsecured, and all debts, suits, damages, rights, remedies, losses, liabilities, obligations, judgments, actions, Causes of Action, demands, or claims of every kind or nature whatsoever, in law, at equity, or otherwise.

En cuanto a las reclamaciones de gastos administrativos, la Sección 1.51 del Plan de Ajuste de la Deuda dispone que:

1.51 Administrative Claim Bar Date:

Unless otherwise ordered by the Title III Court, the date established by the Title III Court and set forth in the Confirmation Order as the last day to file proof of Administrative Expense Claims, which date shall be no more than ninety (90) days after the Effective Date, after which date, any Administrative Expense Claim, proof of which has not been filed, shall be deemed forever barred, and the Debtors and Reorganized Debtors shall have no obligation with respect thereto; provided, however, that no proof of Administrative Expense Claim shall be required to be filed if such Administrative Expense Claim (a) shall have been incurred (i) in accordance with an order of the Title III Court

or (ii) with the written consent of the applicable Government Parties expressly granting such Administrative Expense Claim, (b) is a Professional Claim, (c) is an intergovernmental Claim, (d) is an Administrative Expense Claim of the IRS for the payment of taxes incurred by any of the Debtors during the period from and after the Commonwealth Petition Date, the ERS Petition Date or the PBA Petition Date, as applicable, or (e) is the subject of a pending motion seeking allowance of an administrative expense pursuant to Bankruptcy Code section 503(b) as of the entry of the Confirmation Order.

De igual forma, el párrafo 44 del *Confirmation Order* advierte sobre la necesidad de presentar una solicitud de gastos administrativos. Específicamente, la aludida sección dispone que:

44. Administrative Claim Bar Date. The last day to file proof of Administrative Expense Claims shall be ninety (90) days after the Effective Date, after which date, any Administrative Expense Claim, proof of which has not been filed, shall be deemed forever barred, and the Debtors and Reorganized Debtors shall have no obligation with respect thereto; provided, however, that no proof of Administrative Expense Claim shall be required to be filed if such Administrative Expense Claim (a) shall have been incurred (i) in accordance with an order of the Court or (ii) with the written consent of the applicable Government Parties expressly granting such Administrative Expense Claim, (b) is a Professional Claim, (c) is an intergovernmental Claim, (d) is an Administrative Expense Claim of the IRS for the payment of taxes incurred by any of the Debtors during the period from and after the Commonwealth Petition Date, the ERS Petition Date, or the PBA Petition Date, as applicable, (e) relates to actions occurring in the ordinary course during the period from and after the respective Debtor's petition date up to and including the Effective Date, (f) relates to a Claim that is subject to the provisions of the ACR Order, including, without limitation, "grievance claims" relating to any of the Debtor's collective bargaining agreements, or (g) is the subject of a pending motion seeking allowance of an administrative expense pursuant to section 503(b) of the Bankruptcy Code as of the entry of this Confirmation Order; and, provided, further, that any such proof of Administrative Expense Claim by a governmental unit shall remain subject to the rights and interests of the Debtors and Reorganized Debtors, as the case may be, and any other party in interest to interpose an objection or other defense to the allowance or payment thereof.

Al respecto, la Sección 1.52 del Plan de Ajuste de la Deuda define una reclamación de gastos administrativos como:

1.52 Administrative Expense Claim:

A Claim against the Debtors or their Assets constituting a cost or expense of administration of the Title III Cases asserted or authorized to be asserted, on or prior to the Administrative Claim Bar Date, in accordance with sections 503(b) and 507(a)(2) of the Bankruptcy Code arising during the period up to and including the Effective Date, and otherwise complying with applicable Puerto Rico law, including, without limitation, subject to the occurrence of the Effective Date, and except as provided in Section 3.5 hereof, Consummation Costs and PSA Restriction Fees; provided,

however, that, under no circumstances shall an Administrative Expense Claim include the PBA Administrative Expense Claim.

Finalmente, es importante mencionar que *Notice of (A) Entry of Order Confirming Modified Eighth Amended Title III Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, et al. Pursuant to Title III Of PROMESA and (B) Occurrence of the Effective Date* presentado el 15 de marzo de 2022 –en el caso 17-03283-LTS– estableció como fecha límite el 13 de junio de 2022 para que los acreedores presentaran una solicitud de pago por Reclamaciones de Gastos Administrativos conforme al párrafo 44 del *Confirmation order*. Además, el *Notice* advirtió que quien falle en presentar su reclamación en o antes de dicha fecha quedará vedado de hacer valer su reclamación de pago contra el deudor. Íd.

### III.

En este caso, la apelante nos solicita la revocación de la *Sentencia* mediante la cual el TPI aplicó el *injunction* establecido en el *Confirmation order* emitido en el caso *In re Commonwealth of Puerto Rico*, Case. No. 17BK3283-LTS. Específicamente, plantea que el *injunction* permanente no cubre la reclamación objeto de la controversia. No tiene razón.

Según se desprende de las disposiciones citadas en la exposición del derecho, desde el 15 de marzo de 2022, el *injunction* establecido en el *Confirmation order* sustituyó el efecto de la paralización automática, emitida desde la presentación de la petición de quiebra. Es decir, el *injunction* dispuesto en el párrafo 59 del *Confirmation order* paralizó las reclamaciones pasadas, presentes y futuras de todas las entidades frente al deudor, incluyendo aquellas cuyos hechos surgieron posterior a la petición de quiebra. **Además, de las citadas disposiciones se desprende que los deudores quedarán liberados de todos los reclamos, causas de acción o pleitos, que surjan antes de la vigencia del**

**Plan de Ajuste de la Deuda (15 de marzo de 2022), como el presente.**

En cuanto al procedimiento de reclamaciones de gastos administrativos, según el *Confirmation order*, este es el único remedio disponible en los casos *post-petition* como el que hoy atendemos. Es decir, en este caso, la apelante debe tramitar su reclamación mediante el procedimiento de gastos administrativos dispuesto en el párrafo 44 del *Confirmation order*, en o antes del término concedido por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Al respecto, destacamos que en su alegato el ELA presentó una *Minuta* de donde surge que la apelante presentó el *proof of claim* ante la Corte de Distrito.

Ante tales circunstancias, resolvemos que el TPI no erró al ordenar el archivo del caso. En consecuencia, **CONFIRMAMOS** la *Sentencia* apelada.

**IV.**

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la *Sentencia* apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones